QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, Y AL VALOR AGREGADO, A CARGO DE SALOMÓN JUAN MARCOS ISSA Y SUSCRITA POR LOURDES EULALIA QUIÑONES CANALES, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Diputado Salomón Juan Marcos Issa y diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos mencionados, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en años anteriores, ha pretendido suprimir procedimientos para pagar el Impuesto sobre la Renta por medio de los considerados regímenes especiales; es decir, aquellos que tienen una forma diferente para cubrir el impuesto al señalado por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero siempre ha encontrado sectores de contribuyentes, que por su capacidad administrativa y/o contributiva, justifican un régimen diferente al general de ley.

Se tiene por ejemplo en la ley mencionada, el régimen de Contribuyentes Menores, diseñado para personas físicas que obtienen ingresos derivados de actividades empresariales, pero con baja capacidad administrativa e ingresos acumulables reducidos.

Así tenemos que, para los años de 1985 a 1987, el límite de ingresos obtenido en el ejercicio anterior (Contribuyentes Menores), se fijó en cantidades de \$7'250.00 a \$23'000.00; luego de 1988 a 1989, se fijó en 32 veces el Salario Mínimo General del Distrito Federal elevado al año (\$117,734.40 para el último ejercicio citado), para reducirse a 10 salarios mínimos de 1990 a 1997 (\$96,452.50 para éste último año).

A partir de 1998, desaparece del ordenamiento legal citado, el régimen de Contribuyentes Menores, al contemplar el "Régimen de Pequeños Contribuyentes", que debe aplicarse a personas físicas que realizaban operaciones con público en general y que hubieran obtenido ingresos en el año anterior, hasta \$2'233,824.00.

Y esa partir de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente desde el año de 2002, que se encuentra en su texto, el "Régimen de Pequeños Contribuyentes", limitado también para quienes realizan actividades empresariales con público en general, que hubieran obtenido ingresos en el ejercicio anterior hasta \$1'500,000.00 (fijado para el año 2012, en \$2'000,000.00).

Otro ejemplo que se tiene en la mencionada ley, es el de personas físicas que realizan actividades del Sector Primario (agricultura, silvicultura, ganadería y pesca) y de autotransporte terrestre de carga y de pasaje, para quienes, en cada ejercicio fiscal (desde antes de 1998) se emite la "Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2012, vigente para éste ejercicio fiscal. Desde luego que se justifica la emisión por parte del Servicio de Administración Tributaria, para el cumplimiento de obligaciones para estos sectores de contribuyentes, ya que en sus consideraciones quedó expuesto que: "..., con el fin de considerar las características propias de operar de dichos sectores, se estima conveniente dar continuidad en la presente Resolución a

determinadas facilidades administrativas que la autoridad fiscal otorgó en ejercicios fiscales anteriores. Por ello, este Órgano expide la...” resolución mencionada.

A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para incluir a todos los contribuyentes al régimen general de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre se encontrarán razones o justificaciones para que grupos o sectores de contribuyentes cuenten con ciertas facilidades para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que se debe reflejar principalmente, en el pago de sus impuestos.

Así tenemos a las personas físicas que hasta el 2007, cumplieron sus obligaciones tributarias con el procedimiento denominado de “Auto-facturación”, en el que las autoridades fiscales incluyeron en la Resolución Miscelánea Fiscal a recolectores de desperdicios industrializables, como son: papel y cartón, vidrio, plástico y metales; aplicable a personas físicas que enajenaban estos materiales a las industrias, para su utilización como materia prima.

El reciclaje, es una de las historias ambientales más exitosas de finales del siglo 20; según datos del documento “Hacia una Economía Verde” elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la industria del reciclaje da trabajo actualmente a 12 millones de personas únicamente en tres países (Brasil, China y Estados Unidos) y a nivel mundial representa un mercado estimado en 410,000 millones de dólares anuales.

El reciclaje torna los materiales que se hubiesen convertido en residuo, en recursos valiosos. De hecho, el recolectar los materiales reciclables es tan sólo un paso en una serie de acciones que generan ganancias desde el punto de vista financiero, ambiental y social, entre los que se encuentran:

- Protege y expande los empleos del sector manufacturero y aumenta la competitividad mexicana en el mercado global;
- Reduce la necesidad de los vertederos y la incineración;
- Ahorra energía y evita la contaminación causada por la extracción y procesamiento de materiales vírgenes;
- Disminuye las emisiones de gases de invernadero que contribuyen al cambio climatológico global;
- Conserva los recursos naturales como la energía, madera, el agua y los minerales entre otros;
- Ayuda a sostener el medioambiente para generaciones futuras.

Derivada de la crisis económica mundial recientemente vivida y ante las circunstancias actuales de deterioro de los recursos naturales así como de la extrema pobreza en que se encuentran muchísimas personas, nace una nueva iniciativa desde la Organización de las Naciones Unidas que promueve la transición de las economías hacia una economía verde. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), considera que una economía verde debe “mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales de escasez”.

Esta economía verde, tiene por objeto contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicamente en lo que se refiere a medio ambiente y los recursos naturales, pobreza y empleos verdes (*sostenidos*) así como a propiciar un mejor bienestar para la sociedad en general y las futuras generaciones.

El PNUMA establece una serie de condiciones favorables que deben existir a nivel nacional para lograr una verdadera economía verde, estas condiciones incluyen: cambios en la política fiscal, reforma y reducción de subsidios con efectos perjudiciales para el ambiente y mejora y ejecución de normas y regulaciones que favorezcan el medio ambiente, entre otras.

México no es la excepción de las circunstancias mundiales. Sin embargo, la transición a una economía verde requiere de diversos instrumentos que faciliten su implementación y coadyuven a un trabajo conjunto de empresas, sociedad y gobierno, para beneficio de todos.

Aunado a lo anterior, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce en el documento “El Medio Ambiente en México, 2009” que en el año 2008, a pesar de tener una tasa de recolección de RSU de 90.1 por ciento, únicamente se reciclaba el 3.6 por ciento de los mismos, por lo tanto, aún existe un gran potencial en este sector. Del total reciclado durante 2008, 42.1 por ciento correspondió a Papel y cartón, 28.7 por ciento a Vidrios, 27.8 por ciento a Metales, 1.3 por ciento a Plásticos y 0.2 por ciento a Textiles.

De seguir por este camino el panorama es desolador, el PNUMA calcula que hoy en día se recicla únicamente el 25 por ciento de los residuos generados a nivel mundial y bajo las condiciones actuales, para el año 2050 se estarían generando en el mundo más de 13,000 millones de toneladas anuales de residuos, 20 por ciento más que en 2009.

A continuación se exponen algunos datos relevantes sobre la utilización de materiales reciclables o secundarios:

Carbon Foot Print (Huella de Carbón) de la producción primaria (con mineral ó material virgen) vs producción secundaria (con materiales reciclados) medido en emisiones de ton CO₂eq / ton producto:

Producto	Primaria	Secundaria	Reducción
Papel	0.17	0.14	18%
Acero	1.97	0.70	64%
Aluminio	3.83	0.29	92%
Cobre	4.23	0.44	90%
Plomo	2.10	0.02	99%
Nickel	11.40	0.22	98%
Estaño	23.96	0.03	100%
Zinc	3.90	0.56	86%

Requerimientos de energía en la producción primaria (con mineral ó material virgen) vs producción secundaria (con materiales reciclados) medido en megajoules / tonelada producto:

Producto	Primaria	Secundaria	Reducción
Papel	35,200	18,800	47%
Acero	21,900	11,700	47%
Aluminio	54,000	2,400	96%
Cobre	33,000	6,300	81%
Plomo	20,000	130	99%
Nickel	114,000	1,860	98%
Estaño	18,200	200	99%
Zinc	42,000	18,000	57%
<i>Report on the Environmental Benefits of Recycling”, October 2008. Sue Grimes, John Donaldson and Dr. Gabriel Cebrián Gómez, Center for Sustainable Production & Resource Efficiency (CSPRE), Imperial College London for the Bureau of International Recycling (BIR).</i>			

Hoy en día, pese a los grandes beneficios que aporta el reciclaje de los residuos y de los instrumentos que prevé la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos que promueve la aplicación de las 3 R's (Reutilizar, Reducir y Reciclar), los planes de manejo entre otros, no ha sido suficiente para mejorar el manejo integral de los residuos en el país.

Se requiere adicionalmente, que el aspecto tributario del país establezca medidas que se complementen con instrumentos adicionales para mejorar el manejo de los residuos reciclables.

Por lo tanto, uno de los primeros pasos a instrumentar para la transición hacia una economía verde, es incentivar el acopio selectivo de los residuos para propiciar un mercado de reciclaje, dado que un mercado de ésta naturaleza coadyuvaría a la reducción de emisiones atmosféricas al utilizar la energía contenida dentro de los residuos y por otro, un coadyuvante adicional a la preservación de nuestros recursos naturales, potenciando los recursos ya extraídos y disminuyendo el consumo de nuevos recursos.

Las facilidades fiscales que se otorgaron en años anteriores para la deducción de desperdicios industrializables, para determinar la base del Impuesto sobre la Renta, contribuyeron a facilitar el proceso de compraventa de los mismos, propiciando así el reciclaje en el país, la conservación de recursos naturales y el ahorro de energía. Es importante mencionar que quienes ejercían la deducción de “Auto-facturación” son contribuyentes a los que la autoridad tiene plenamente identificados, en su mayoría obligados a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. En tanto que no se tenía un adecuado control sobre las personas físicas que vendían por primera vez este tipo de productos.

Cabe señalar que por su propia naturaleza, el acopio y compra de estos materiales reciclables se realiza en la mayoría de los casos con quienes de manera directa llevan a cabo la tarea de separar los desechos para identificar aquellos susceptibles de volver a industrializar, por lo que resulta difícil que estos “pequeños proveedores” cuenten con capacidad administrativa ya que su carga tributaria es reducida, y por ello se les dificulta cumplir con las obligaciones fiscales, por lo que los adquirentes de los productos pueden llevar a cabo procedimientos de retención de los impuestos Sobre la Renta, Empresarial a Tasa Única, así como del Impuesto al Valor Agregado.

No obstante, como se mencionó anteriormente, el Servicio de Administración Tributaria en 2008, eliminó este esquema de auto facturación para los desechos industrializables en las Reglas de Carácter General; para imponer un procedimiento en el que el adquirente del producto o del servicio, es el responsable de inscribir ante el Registro Federal de Contribuyentes a su proveedor de bienes o servicios; y además, aprovechando que éste ya tiene contacto con el “pequeño proveedor”, captura sus datos en un programa de cómputo proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria y solicita la inscripción del recolector. El mismo adquirente, contrata los servicios de un Proveedor Autorizado de comprobantes fiscales digitales o facturación electrónica y con el RFC del productor, al momento de adquirir sus productos solicita la emisión de una factura electrónica. Sin embargo, dicho esquema está habilitado por las ventas realizadas y servicios prestados en el sector primario, arrendadores a adquirentes de sus bienes o servicios.

Actualmente no existe tratamiento alguno para el sector industrial en la adquisición de desperdicios y materiales de la industria del reciclaje.

De 2008 a la fecha, ha sido muy complicado que el mercado pueda seguir creciendo, actualmente por ejemplo, en el 2005 se exportaron 63,665 toneladas de fibra de papel, en el 2010 se exportaron 177,858 y en el primer semestre de 2011 ya se exportaron 187,740. La principal razón, es que para exportar dicho material reciclable, no se requiere factura y no se pagan impuestos. Pero contrario a ello, los consumidores nacionales de fibra requieren factura, y pagan los impuestos al Valor Agregado y el Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Por lo anterior, se considera importante aprobar un esquema alternativo para esta actividad, que permita estimular la formalidad del mercado del reciclaje con el beneficio que aportaría:

- La protección y preservación de recursos naturales, resultado del retiro de materiales reutilizables que a falta de esta actividad terminarían contaminando el medio o saturando los rellenos sanitarios; y obligando a la extracción de nuevas materias primas;
- El estímulo de una actividad económica que incluye a la cadena de acopiadores de materiales reutilizables – industrialización – reutilización; y por ende
- Incremento en el padrón de contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales, por medio de retención y entero de impuestos, por parte de los adquirentes.

La propuesta que se realiza por medio de ésta Iniciativa, es utilizada hoy en día en el sistema tributario mexicano para las ventas de primera mano del sector primario y tiene por objeto, incrementar el reciclaje y en consecuencia la captación de impuestos y la generación de empleos lícitos, facilitando a los enajenantes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Otro aspecto donde esta iniciativa busca influir de manera positiva es el que se refiere a las tasas de informalidad y desempleo que existen en el país. El PNUMA establece que el empleo en el sector de la gestión de residuos y el reciclaje crecerá de manera notable en los próximos años como respuesta al crecimiento demográfico y económico que se está dando a nivel global así como la inserción de cambios de política promovido a través de la Economía Verde.

En materia de informalidad, hoy en día el INEG calcula que el porcentaje de la población ocupada en el sector informal alcanza el 28.8% del total de la población ocupada, cifra superior al 27.9% y 27.1% registrados durante el tercer y cuarto trimestre de 2010, respectivamente. Si a lo anterior se añade que a Junio de 2011 el número de trabajadores en el sector informal rebasó al número de los

trabajadores permanentes asegurados por el IMSS; esto es, 13 millones 385 mil 674 trabajadores en el sector informal contra 13 millones 81 mil 753 trabajadores permanentes asegurados ante el IMSS según datos del INEG, el panorama resulta poco alentador.

De acuerdo a los datos más recientes publicados por la Organización Internacional del Trabajo, México ocupa el 4º lugar de los países analizados por este organismo en cuanto al tamaño de la población ocupada en el sector informal de la economía, superado únicamente por India (134.3 millones), Brasil (18.6 millones) y Pakistán (16.6 millones).

Según el estudio “Economía Informal: Evolución reciente y perspectivas” realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, anualmente el sector informal de México absorbe en promedio el 31.5% del aumento que se registra en la población ocupada total.

Si a estos argumentos en materia de empleo e informalidad se añade el hecho que la clasificación y el procesamiento de materiales reciclables ocupa diez veces más personas por tonelada métrica que las empleadas en un proceso de incineración o en los rellenos sanitarios, estamos ante un sector con un alto potencial para la generación de empleo.

De adoptarse el mecanismo que se propone, se incorporarán al sistema formal miles de trabajadores del sector de la recolección de residuos que a la fecha no tienen ningún incentivo para formar parte del sector formal de la economía.

Por si resultaran insuficientes los argumentos expuestos hasta el momento, existe un elemento de vital importancia que, dadas las circunstancias actuales del país en materia de inseguridad, representa un serio riesgo para algunos sectores específicos de la población así como para la economía nacional: el crimen organizado.

Como ya se mencionó, para quienes se dedican a la recolección y comercialización de materiales para reutilizar les es muy difícil cumplir con toda la serie de requisitos que les exige la autoridad en materia fiscal, lo que al mismo tiempo ocasiona un serio predicamento para los adquirientes de dichos materiales ya que estos no cuentan con una forma legalmente válida para comprobar sus erogaciones por la compra de estos insumos.

Es decir, los recolectores de materiales reciclables como son cartón y papel, vidrio, plástico y metales, que fueron excluidos a partir del año 2008 de la “Auto-facturación” para efectos fiscales, significó que dichas actividades de recolección perdieron interés para la industria por falta del régimen fiscal adecuado; por lo que éstos recolectores fueron o han sido presa fácil del crimen organizado, al ingresarlos a sus filas, por falta de ingresos de la actividad que realizaban.

Con la implementación de mecanismos como el contenido en esta iniciativa, otorga legalidad y transparencia a la operación de todo el sector del reciclaje, que además de incrementar la eficiencia, coadyuvará a mejorar la recaudación de contribuciones federales, como son los impuestos Sobre la Renta, Empresarial a Tasa Única y al Valor Agregado, que serán retenidos al final de la cadena de reciclaje por las empresas consumidoras de estas materias primas, quienes son normalmente grandes contribuyentes; con lo que se reduce la necesidad de verificar la recaudación de miles de pequeños negocios difíciles hasta de localizar, dado que estos pueden cambiar su nombre y localización con gran facilidad, ya que no cuentan con establecimiento fijo.

Impuesto sobre la renta

Se propone modificar esta Ley, mediante adición, en el Título II de las Personas Morales, Capítulo II de las Deducciones, Sección Tercera del Costo de lo Vendido, del artículo 45-C-Bis y en el caso de personas físicas con actividades empresariales del Título IV, Capítulo II, Sección I, la adición de un segundo párrafo a la fracción II del artículo 123, pasando los párrafos segundo y tercero actuales a tercero y cuarto, para establecer el procedimiento aplicable a los adquirentes de desperdicios industrializables, a efecto que los adquirentes puedan considerar como deducción la compra de dichos productos con el procedimiento de “Auto-facturación”, es decir, que éstos emitan facturas por cada operación en la que adquieran las mercancías que se indican en la Iniciativa, anotando los datos del proveedor y procediendo a retener el Impuesto sobre la Renta a una tasa del 1.5 por ciento del importe de la operación.

Se excluye de esta propuesta al Sector Primario, toda vez que para ellos el Servicio de Administración Tributaria emite anualmente una Resolución que contiene facilidades administrativas.

Se propone que cada adquirente que industrialice los materiales reciclables, no exceda del 70% de estas compras, del total de materias primas que efectúen durante el ejercicio fiscal y para el caso de comercialización, podrá ser hasta el 100 por ciento.

Se propone que el Servicio de Administración Tributaria autorice a los adquirentes de desperdicios industrializables, la emisión de comprobantes, que serán utilizados únicamente para la adquisición de materiales reciclables, una vez que dicho adquirente presente aviso ante la autoridad fiscal competente, a principio de cada ejercicio fiscal, mencionando que durante dicho año adquirirá desperdicios industrializables. La emisión de comprobantes deberá estar impresa y contendrá requisitos que señale la ley, de la forma que indica el texto propuesto, anotando por separado la retención de cada contribución. El original del comprobante lo conservará el adquirente de las mercancías y entregará copia a su proveedor.

Se propone liberar el requisito de que se emitan cheques que contengan el texto “Para abono en cuenta del Beneficiario” en los pagos por la adquisición de materiales reciclables, considerando que todas estas compras se realizarán a personas físicas con bajo nivel de ingresos sin capacidad para abrir cuentas en el sistema financiero.

Impuesto empresarial a tasa única

Respecto al Impuesto Empresarial a Tasa Única, desde el inicio de vigencia de la Ley, quedó precisado que las compras de mercancía realizadas por medio del sistema de “Auto-facturación”, no sería deducible para el adquirente; y la razón es que la persona física recolector de materiales reciclables no paga dicha contribución. Por lo que se propone adecuar el primer párrafo de la fracción IV del artículo 6 de la ley, a efecto de permitir la deducción a los adquirentes que emitan comprobantes al adquirir materiales reciclables.

Por lo mencionado, se propone que los contribuyentes personas físicas que enajenen los materiales reciclables, cumplan con el pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a efecto que los adquirentes puedan llevar a cabo su deducción, en beneficio que un mayor de la recaudación tributaria; por tanto, es necesario adecuar el texto legal para establecer el procedimiento de retención por parte de los adquirentes y el enajenante cumpla en forma integral sus obligaciones fiscales federales; con la consecuente deducción para determinar la base de esta contribución para las empresas que adquieran los bienes reciclables.

En la presente Iniciativa se plantea el procedimiento de retención de impuestos que realice el adquirente al proveedor, en relación al Impuesto Empresarial a Tasa Única, dejando constancia de dicha acción en el comprobante de la operación de compra venta que se emita. Dicha retención se propone al 1.5% del importe de la operación, toda vez que se complementará ésta contribución, con el 1.5 por ciento del Impuesto sobre la Renta que también se retenga; la retención del Impuesto Empresarial a Tasa Única en el porcentaje mencionado, se propone en razón que el “pequeño proveedor” al incurrir en gastos por su actividad, no contarán con documentación comprobatoria que lo demuestre; procedimiento que el Servicio de Administración Tributaria ha diseñado en facilidades administrativas concedidas a diversos sectores de contribuyentes.

El adquirente tendrá obligación de emitir constancia de retención y presentar declaración anual de retenciones realizadas, en los formatos que autorice el Servicio de Administración Tributaria para tal efecto. En consecuencia se propone liberar a las personas físicas que enajenen las mercancías reciclables, de presentar declaraciones provisionales y anual de esta contribución, así como de llevar contabilidad.

Impuesto al valor agregado

Con relación al procedimiento de adquisición de mercancías reciclables que se propone, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de retenciones no es necesario adecuarla, toda vez que tanto el texto de dicha ley en su artículo 1-A, fracción II, inciso b) y cuarto párrafo, como su Reglamento en su artículo 2, establecen con toda exactitud, los supuestos para que el adquirente de las mercancías a que se refiere la presente Iniciativa, realice retención y entero de la totalidad del impuesto causado por el enajenante; solamente se propone adicionar el procedimiento de retención de las personas físicas que adquieran las referidas mercancías reciclables a personas físicas, adicionando la fracción V al artículo 1-A.

Con los procedimientos de retención de impuestos por parte del adquirente al “pequeño proveedor”, respecto de los impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y al valor agregado, el enajenante cumplirá íntegramente con sus obligaciones fiscales; sin embargo, por tratarse de personas físicas con reducida capacidad administrativa, se propone liberarlos llevar contabilidad y de presentar declaraciones, considerando el impuesto retenido como pago definitivo, ya que no contarán con comprobantes con requisitos fiscales para determinar impuesto acreditable.

Únicamente se propone modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para liberar a las personas físicas que enajenen las mercancías reciclables, de presentar declaraciones de esta contribución, así como de llevar contabilidad, visto el procedimiento de retención y entero de esta contribución por parte del adquirente.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía, la modificación de las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto Empresarial a Tasa Única y del Impuesto al Valor Agregado, con el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona un artículo 45-C-Bis y un segundo párrafo a la fracción II del artículo 123, pasando los párrafos segundo y tercero actuales a tercero y cuarto párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 45-C-Bis. Los contribuyentes del presente Título, adicionalmente podrán adquirir los siguientes bienes, que se podrán comprobar sin la documentación que reúna los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, siempre que se trate de la primera enajenación realizada por personas físicas sin establecimiento fijo, respecto de desperdicios industrializables.

Únicamente podrán optar por lo establecido en este artículo, aquellos contribuyentes cuya actividad preponderante sea la comercialización o industrialización de los productos adquiridos. Y en ningún caso la aplicación de lo previsto en este artículo, podrá exceder del 70% del total de compras que efectúen los adquirentes que industrialicen los productos.

A fin de poder comprobar las adquisiciones a que se refiere este artículo, las personas morales adquirentes emitirán comprobantes fiscales impresos con dispositivo de seguridad con numeración consecutiva por duplicado, como una serie diferente a los comprobantes que emitan por sus otras actividades, en los términos del artículo 29-C fracción II del Código Fiscal de la Federación, con los siguientes datos:

- a) Impresos con el nombre, denominación o razón social del adquirente, domicilio fiscal, clave del Registro Federal de Contribuyentes, régimen fiscal y número de folio.
- b) Nombre del vendedor, ubicación de su negocio o domicilio, la firma del mismo o de quien reciba el pago y, la clave del Registro Federal de Contribuyentes en caso de contar con ésta.
- c) Descripción del bien objeto de la venta, número de unidades, precio unitario, precio total, lugar y fecha de expedición.
- d) En su caso, número del cheque con el que se efectúa el pago y nombre del banco contra el cual se libra.
- e) El Impuesto sobre la Renta retenido al enajenante con motivo de la operación realizada.

Los adquirentes de los bienes a que se refiere el presente artículo que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a \$1'000,000.00, en su caso cumplirán lo establecido en los artículos 31, fracción III, con excepción del quinto párrafo de dicha fracción y 125, último párrafo de la presente Ley, según se trate de personas morales o físicas, respectivamente, respecto al pago que efectúen en las adquisiciones realizadas.

Los originales de los comprobantes, se deberán empastar y conservar, debiendo registrarse en la contabilidad del adquirente y se entregará copia del comprobante fiscal impreso con dispositivo de seguridad, a quien reciba el pago.

Presentar a más tardar el 30 de abril de cada ejercicio fiscal, aviso ante la Autoridad fiscal de Servicios al Contribuyente correspondiente a su domicilio fiscal, indicando que adquirirá mercancías por el procedimiento a que se refiere este artículo.

Presentar durante el mes de junio del ejercicio fiscal siguiente, ante la Autoridad fiscal de Servicios al Contribuyente competente, escrito libre acompañando medios magnéticos en los que se proporcione la información sobre las operaciones realizadas adquiridas por el procedimiento a que se refiere este artículo, durante el ejercicio fiscal anterior, conforme al programa elaborado por el Servicio de Administración Tributaria, para tales efectos.

En el caso de no presentar el aviso, así como la información en los términos y plazos antes señalados, esta facilidad no surtirá efectos, excepto que el programa que debe emitir el Servicio de Administración Tributaria, no se encuentre liberado para el ejercicio fiscal.

Quienes hayan optado por adquirir mercancías en términos de lo previsto en este artículo, deberán retener el 1.5% del monto total de la operación realizada, por concepto de Impuesto sobre la Renta, el cual deberán enterar conjuntamente con su declaración de pago provisional de retenciones, correspondiente al periodo en que se efectúe la citada operación, en el concepto identificado como "ISR otras retenciones", en la aplicación electrónica correspondiente. Igualmente, deberá proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención efectuada.

Los proveedores de los bienes a que se refiere este artículo, no estarán obligados a presentar declaraciones de pago provisional y anual del Impuesto sobre la Renta por los ingresos propios de las operaciones a que se refiere este artículo, incluyendo las declaraciones de información por las cuales no se realiza el pago, ni a llevar contabilidad.

Artículo 123. ...

I. ...

II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos.

Podrán adquirir desperdicios industrializables, siempre que cumplan con los plazos y requisitos establecidos en el artículo 45-C-Bis de la presente Ley.

...

...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 6 fracción IV, primer párrafo, y se adicionan los artículos 1-A y 18, fracciones V y VI de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:

Artículo 1.A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto a la tasa del 1.5% del total de la operación, las personas físicas y morales que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización.

Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo sustituirán al enajenante en la obligación de pago y entero del impuesto.

El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado y lo enterará mediante declaración en las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se realice el pago.

Artículo 6. Las deducciones autorizadas en esta Ley, deberán reunir los siguientes requisitos:

I. a III. ...

IV. Que las erogaciones efectuadas por el contribuyente cumplan con los requisitos de deducibilidad establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. No se considera que cumplan con dichos requisitos las erogaciones cuya deducción proceda por un determinado por ciento del total de los ingresos o erogaciones del contribuyente que las efectúe o en cantidades fijas con base en unidades de medida, autorizadas mediante reglas o resoluciones administrativas.

...

Artículo 18. Los contribuyentes obligados al pago del impuesto empresarial a tasa única además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:

I. a IV. ...

V. En el caso de las personas físicas que enajenen desperdicios industrializables a que se refiere el artículo 45-C-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedan liberados de llevar contabilidad y el comprobante de sus operaciones deberá ser expedido por el adquirente, en términos de lo establecido en la Ley mencionada, dicho adquirente entregará una copia del comprobante al enajenante, la que deberá conservar a disposición de las autoridades fiscales. Los proveedores a que se refiere este párrafo, no estarán obligados a presentar declaraciones de pago provisional y anual del este impuesto por los ingresos derivados de estas operaciones, incluyendo las declaraciones de información por las cuales no se realiza el pago.

El comprobante deberá indicar el importe total de la operación y el monto equivalente al impuesto que se retiene. Si la contraprestación se paga en parcialidades, en el comprobante que se expida por el acto o actividad de que se trate, se deberá indicar además el importe total de la parcialidad que se cubre en ese momento, y el monto equivalente al impuesto que se retiene.

Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, por el pago que de las mismas se haga con posterioridad a la fecha en la que se hubiera expedido el comprobante a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes deberán expedir un comprobante por cada una de esas parcialidades, así como anotar el importe de la parcialidad que ampare y el monto del impuesto retenido, en su caso, y el número y fecha del documento que se hubiera expedido en los términos del párrafo anterior amparando la enajenación de bienes.

Los contribuyentes que ejerzan la opción de anotar el importe de las parcialidades que se paguen, en el reverso del comprobante en los términos del artículo 134, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán anotar la fecha de pago, el monto del impuesto trasladado y, en su caso, el monto del impuesto retenido. En este supuesto, los contribuyentes no estarán obligados a expedir los comprobantes por cada una de las parcialidades.

VI. Expedir constancias por las retenciones del impuesto que se efectúen. y proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información sobre las personas a las que les hubieren retenido el impuesto establecido en esta Ley, dicha información se presentará, a más tardar dentro del mes inmediato posterior al que corresponda dicha información.”

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción V al artículo 1-A y al artículo 32 fracción III, un párrafo 10o. y el 10o.actual pasará a ser 11o., todos de la Ley del Impuesto al valor agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1-A. ...

...

V. Personas físicas que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización.

...

Artículo 32.

I a II. ...

III. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Las personas físicas a que se refiere el artículo 1-A, fracción II, inciso b) y fracción V de la presente ley, a quienes el adquirente de los desperdicios industrializables les realice retención, no estarán obligados a presentar declaraciones mensuales de este impuesto por los ingresos que quedaron sujetos a retención, ni a llevar contabilidad, ya que el impuesto retenido tendrá el carácter de definitivo.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2012.

Diputados: Salomón Juan Marcos Issa; Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbricas).